

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero: Que la parte demandante de doña Cecilia Vilches Beiza, ha deducido recurso de casación en la forma en contra de la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veinte, por el 26° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada y acogió parcialmente la acción deducida, desechando el daño emergente por estimar que la pretensión fue indeterminada, así como también el lucro cesante, por considerar que la prueba acompañada fue insuficiente; y que accedió en parte al daño moral, que reguló en la suma de \$15.000.000, suma que estima del todo exigua.

Invoca como causal de casación, la prevista en el numeral 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por haber sido pronunciada la sentencia definitiva con omisión de los requisitos establecidos en el artículo 170 números 4 y 6 del mismo cuerpo legal.

Arguye que en la sentencia, el juez se limitó a enunciar toda la prueba documental aportada por esa parte en orden a acreditar el daño emergente, consistente principalmente en estados de cuenta, boletas, bonos y presupuestos, todos gastos en los cuales incurrió la actora a consecuencia del accidente sufrido producto de la negligencia de la Universidad. Pero, después, en el considerando séptimo, el sentenciador se refiere a la determinación y procedencia del daño emergente, en vez de ponderar y apreciar la abundante prueba documental acompañada por esa parte, limitándose escuetamente a señalar que, en cuanto a la pretensión de un monto por concepto de daño emergente, se concluye que siendo el mismo un detrimento patrimonial actual, el monto solicitado de \$7.000.000 no se condice con la tabla de gastos señalada en el libelo pretensor, la que es por un total de \$6.200.000 y que, además, incluye gastos por estacionamiento



que no se encuentran acreditados, lo que la lleva a estimar que la petición es indeterminada, conclusión que es cuestionada por la recurrente, quien estima haber realizado solicitudes precisas en tanto el tribunal omitió toda consideración a la prueba documental producida.

Segundo: Que tiene aplicación en la especie, lo prevenido en el artículo 768 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que el recurso de invalidación formal puede ser desestimado, si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo.

Por haberse deducido también recurso de apelación, el que se encuentra basado en similares consideraciones a las que se proponen en el de casación, sucede que aún en el evento de ser efectivos los defectos que se atribuyen al fallo, no es su invalidación la única manera de corregir el pretendido perjuicio, lo que conlleva el rechazo del recurso de nulidad formal.

II.- En cuanto a los recursos de apelación.

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos primero y cuarto a décimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Tercero: Que la primera alegación promovida por la demandada, fue la de falta de legitimación pasiva, la que sostuvo en la existencia de un contrato de comodato suscrito el 23 de junio de 2015, entre el representante convencional de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y doña Carolina Carriel Burgos, quien compareció, a su vez, en representación de varias otras personas que aparecen singularizadas en el contrato aparejado a la contestación de la demanda y que fueron calificados como comodatarios.

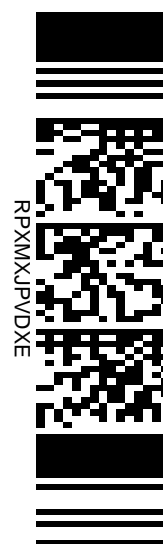
En virtud del mencionado contrato, la universidad comodante entregó a la comodataria, la tenencia material de un espacio de 15 metros por 15 metros, aproximadamente, dentro del inmueble de su propiedad ubicado en



calle Condell N° 343, Providencia, en el sector del patio “La Playa”. El espacio señalado sería destinado por la comodataria a la instalación de stands de difusión, degustación y venta de productos agropecuarios, tales como frutas, hortalizas, huevos y otros, preparaciones gastronómicas, además de la realización de charlas y exposiciones sobre alimentación sustentable y rescate de las tradiciones gastronómicas, en el marco de un encuentro sociocultural de carácter privado, denominado “Encuentro del Campo a la Ciudad” entre productores agroecológicos, co-productores de PILGUA SCL y sus invitados. Se fijó vigencia de 6 meses para el contrato, renovables automáticamente, en la forma que se lee de esa convención. Además, la comodataria se obligó a mantener el aseo y limpieza del lugar y *“a cuidar y mantener el perfecto estado los bienes recibidos en comodato, respondiendo de todo daño o deterioro que éstos sufran”*. Finalmente, se acordó que en lo no previsto, serían aplicables las disposiciones legales correspondientes a la materia de que trata el contrato, cláusula innecesaria, pero existente.

Cuarto: Que la presencia de la actora en la universidad, constituye un hecho pacífico, así como también, que se encontraba allí el día 5 de diciembre del año 2015, en el marco de la actividad sociocultural denominada “Encuentro del Campo a la Ciudad”, organizada por la ONG Pilgua, cuya finalidad era ofrecer a los estudiantes y personas interesadas productos agroecológicos, de modo que la demandante participaba en aquella actividad ofreciendo sus productos derivados de la apicultura.

En este escenario, resulta evidente que por haberse producido el accidente dentro del espacio entregado en comodato a una tercera, y participando precisamente en las actividades organizadas por la ONG Pilgua, aparece necesario determinar a quién corresponde la responsabilidad en el hecho acontecido, sea el comodante o el comodatario. Corrobora lo señalado, el hecho que la actora no ingresó a la universidad invitada por ésta,



sino que como invitada (o partícipe) de la ONG gestora del evento celebrado en el espacio cuya tenencia había cedido la universidad a una tercera.

En el escenario descrito, sin perjuicio de que pudo dirigirse también la acción contra la comodataria, no hay duda de que la universidad demandada sí tenía legitimación pasiva, aunque en la tramitación del proceso pudiera establecerse, en definitiva, que aquella no tuvo responsabilidad en el hecho de que se trata.

Quinto Que, al respecto, tiene aplicación lo pactado por contrato y lo establecido en los artículos 2174 y siguientes del Código Civil, que regulan el comodato.

En estas condiciones, en el artículo 2178 se dispone que el comodatario no responde del caso fortuito, salvo en tres casos, sin que ninguno de ellos aparezca demostrado en autos: no se ha justificado que haya siquiera estado utilizando el árbol, la tercera no estaba retrasada en la restitución del espacio cedido, no se ha demostrado que la caída del árbol haya sobrevenido por culpa suya, como tampoco que haya existido accidente en cuyo decurso haya preferido salvar algo propio, y tampoco se hizo expresamente responsable del caso fortuito en el contrato.

Por otra parte, en el artículo 2192, se establecen los casos en que el comodante es obligado a indemnizar al comodatario de los perjuicios que le haya ocasionado la mala calidad o condición del objeto prestado, con tal que la mala calidad o condición reúna estas tres circunstancias: 1ª. Que haya sido de tal naturaleza que probablemente hubiese de ocasionar los perjuicios; 2ª. Que haya sido conocida y no declarada por el comodante; 3ª. Que el comodatario no haya podido con mediano cuidado conocerla o precaver los perjuicios.

Como se aprecia del mérito de la prueba rendida y, especialmente, de lo establecido en el informe sobre la especie Ceibo –reconocido por su autor, quien declaró como testigo en el proceso-, no es posible sostener ninguna de



las tres condiciones arriba descritas. No era probable que el árbol pudiera ocasionar perjuicio alguno; la existencia de los hongos que produjeron su caída no era conocida por lo que tampoco fue declarada; y, tampoco era posible que con mediano cuidado, el demandado hubiera podido conocer y, en su caso, precaver los potenciales daños. En efecto, en dicho informe se indica que el espécimen solo presentaba cerca de un 6% de área afectada, nivel de pudrición que *“no tiene significancia desde el punto de vista estructural y no significaba amenaza alguna de caída del árbol”*. Agregó que *“no hay forma de saber cuándo un árbol presenta infección fungosa, situación que se dificulta aún más en este caso, dado que no se trata de un ataque extendido que pudiera haber afectado el vigor del árbol”*, por el contrario, aseveró que la evidencia recogida del árbol de que se trata demuestra que al momento de la corta estaba perfectamente sano, *“lo que indica que probablemente se trataba de un árbol sano y vigoroso.”*

En resumen, el evento que provocó el daño, corresponde a un caso fortuito del que no aparece posible atribuir responsabilidad a la comodataria – no emplazada al presente juicio y con los antecedentes agregados en autos a su respecto- y tampoco a la comodante, demandada en autos. En este sentido, constituye caso fortuito de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Código Civil, *“el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”*, razón por la cual, la acción deducida en autos no puede prosperar.

Sexto: Que, por no haberse tenido por establecida la responsabilidad de la demandada, se hace innecesario analizar la prueba rendida para demostrar la existencia de daños a la salud de la actora y gastos provocados en su recuperación.

Séptimo: Que por haber actuado con motivo plausible, se dispondrá que cada parte pague sus costas.



Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo prevenido en los artículos 186 y siguientes y 767 y siguientes del Código der Procedimiento Civil, se declara que:

I.- Se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto contra la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veinte, por el 26° Juzgado Civil de Santiago.

II.- Se revoca la sentencia apelada en cuanto por ella se accedió a la demanda deducida y, **en su lugar, se declara que aquella queda rechazada.**

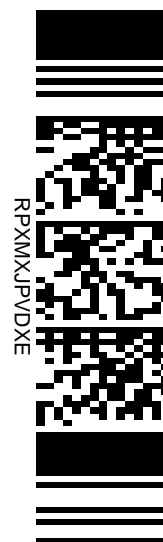
Redactó la ministra Carolina Vásquez Acevedo.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 7613-2020 Civil

Pronunciada por la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada con los ministros Carolina Vásquez Acevedo, Dora Mondaca Rosales y Fiscal Judicial Anamaria Quintero Harvey.

No firma la ministra Vásquez Acevedo por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Decimotercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Dora Elisabeth Mondaca R. y Fiscal Judicial Ana Maria Del Pilar Quintero H. Santiago, tres de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a tres de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 03 de septiembre de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>